

# Latín-A: Frontera colombo-brasilera: persistencia del conflicto armado y alcances de las estrategias de seguridad

Colombia-Brazil border: persistence of armed conflict and achievements of their security strategy  
**Irene-Alejandra Cabrera-Nossa** (1987, colombiana, Universidad Externado de Colombia, Colombia)  
irene.cabrera.nossa@gmail.com

## Resumen

Un análisis de la evolución reciente del conflicto colombiano (1998-2011) permite corroborar que los grupos irregulares han relocalizado una parte considerable de su presencia armada en las fronteras, con el fin de garantizar su supervivencia. En medio de esta tendencia, el presente artículo tiene como objetivo central revisar la pertinencia de las medidas político-militares de Colombia y Brasil para contrarrestar los efectos negativos de este repliegue. Si bien en ambos países es claro un avance en sus políticas de seguridad fronteriza, aún se subestima el valor estratégico de su frontera compartida y la necesidad de consolidar una cooperación en materia de seguridad. Lo anterior requiere especial atención a la luz de varios estudios sobre el papel de las fronteras en los conflictos internos y externos, cuando el uso de zonas limítrofes por parte de grupos ilegales permite una prolongación de la confrontación armada y puede generar un deterioro de las relaciones vecinales en ausencia de una estrategia conjunta de seguridad. En suma, la presencia de grupos armados en las fronteras constituye un desafío para la agenda bilateral, más aun cuando geográficamente se constata una persistencia en las manifestaciones del conflicto y la violencia. Como resultado, es preciso revisar la idoneidad de las estrategias actuales de Colombia y Brasil para fortalecer su seguridad y favorecer una resolución del conflicto.

**Palabras clave:** Brasil, Colombia, conflicto armado, cooperación, fronteras  
**Recibido:** 05-06-2012 → **Aceptado:** 07-07-2012

**Cítese así:** Cabrera-Nossa, I-A. (2012). Frontera colombo-brasilera: persistencia del conflicto armado y alcances de las estrategias de seguridad. *Boletín Científico Sapiens Research*, 2(2), 11-17.

## Abstract

Reviewing the Colombian conflict evolution (1998-2011), it is possible to confirm the armed groups' relocation on border zones in order to guarantee their survival. By considering this trend, the main purpose of this article is to discuss the accuracy of Colombia and Brazil strategies to respond the negative effects of this shift. In spite of their progress in terms of security border policies, both countries underestimate the strategic value of their shared frontier and the importance of reinforcing their security cooperation. According to several studies about border's role in national and international conflicts, this situation needs special awareness. In particular, the use of border zones by rebels, on the one hand, allows a prolongation of war, and on the other hand, facilitates the spoilage of diplomatic relations when neighboring states don't have a common security strategy. In this way, the armed groups' presence in border areas becomes a challenge in the bilateral agenda, especially

when geographical studies bear out the continuity of violent events. Hence, it is imperative to evaluate the suitability of Colombia and Brazil strategies to enhance their security and to facilitate a conflict resolution.

**Key words:** armed conflict, borders, Brazil, Colombia, cooperation

## Introducción

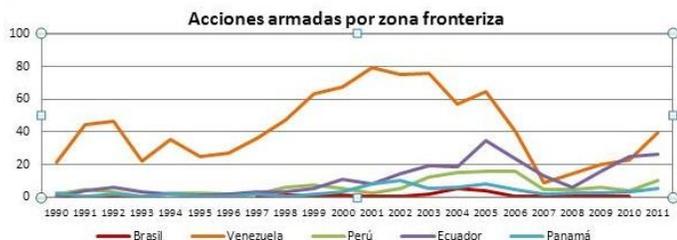
En la evolución reciente del conflicto armado en Colombia se registra una transformación de la presencia activa<sup>1</sup> de los grupos irregulares. En particular, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los reductos paramilitares poco a poco han relocalizado su esfuerzo militar hacia zonas de frontera para garantizar su supervivencia y lograr una prolongación del conflicto. Las fronteras terrestres de Colombia con Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela y Brasil, además de ser franjas de retaguardia histórica, en la actualidad son altamente funcionales debido a que permiten evadir los contactos armados que promueve el Gobierno y porque son espacios vitales para mantener su economía de guerra mediante el tráfico de distintos bienes.

En medio de esta dinámica, la frontera colombo-brasilera es particularmente interesante por la baja intensidad de la confrontación armada y, a su vez, por la poca articulación de esta zona con el resto del territorio nacional. Los departamentos colombianos que se encuentran sobre esta frontera (Guainía, Vaupés y Amazonas) se caracterizan por su baja densidad poblacional; escasa conexión terrestre con la capital; mínima presencia estatal; y una baja cobertura en servicios públicos. En efecto, a primera vista, este sería un escenario propicio para que los grupos irregulares mantuvieran un control territorial a lo largo y ancho de estos departamentos (DeRoueny Sobek, 2004). No obstante, al comparar las acciones armadas en los departamentos de esta frontera respecto a otras zonas fronterizas, se descubre un número muy bajo de acciones militares por parte de los grupos irregulares (ver línea roja en gráfico 1).

Así, este artículo pretende revisar cuál es la relevancia de la frontera colombo-brasilera dentro de la dinámica de guerra de los últimos años en el marco de dos temas centrales. Primero, las razones que explican el repliegue reciente de los grupos irregulares hacia este escenario. Y segundo, la pertinencia de las políticas de seguridad de Colombia y Brasil frente a las tendencias del conflicto y la violencia.

<sup>1</sup> La presencia activa hace alusión a los lugares donde se adelanta algún tipo de acción militar por parte de los grupos irregulares.

**Gráfico 1: Acciones armadas por zona fronteriza (1990-2011)**



Fuente: elaborado a partir de datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia. Nota: los datos corresponden a los departamentos que se encuentran situados en su mayor parte sobre una determinada línea fronteriza.

### Relocalización de los grupos irregulares hacia la frontera colombo-brasilera

Los departamentos colombianos de Guainía, Vaupés y Amazonas históricamente han ofrecido importantes ventajas geográficas a nivel militar y también para adelantar actividades ilícitas. En primer lugar, la complejidad selvática de esta zona le ha permitido a los distintos grupos ilegales establecer bastiones de retaguardia. Hasta el inicio del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), la fuerza pública no tenía suficiente tecnología, conocimiento de la zona y capacidad logística a la hora de desplegar campañas de persecución y combate. Por lo anterior, las características orográficas de estos departamentos fueron, por mucho tiempo, una ventaja importante a la hora de diluir los esfuerzos militares del Estado. En segundo lugar, la cercanía de estos departamentos con Venezuela, Brasil y Perú ha facilitado la creación de corredores de tráfico ilícito. Así, los ríos Apaporis, Caquetá, Putumayo y Amazonas no sólo han sido útiles para la movilidad de los grupos ilegales, sino que también facilitan el contrabando de especies silvestres, oro, bienes de primera necesidad como alimentos y medicinas; e intercambio de pasta de cocaína por armamento o precursores químicos (Observatorio, 2008). En efecto, hacia los años ochenta las FARC, a través del Bloque Oriental y Bloque Sur<sup>2</sup>, así como el Cartel de Medellín, se configuraban como los principales actores armados de la zona, dado que aprovechaban estos departamentos como espacios de descanso, entrenamiento y como polos de producción y transporte para el narcotráfico. En este punto cabe señalar que la presencia de estos actores para ese momento y aún en la actualidad no se ha traducido en actividades armadas de alta envergadura. Precisamente, con el propósito de proteger las distintas actividades de financiación que adelantan en esta frontera, los grupos irregulares han procurado mantener un bajo perfil militar para evitar la detección de cultivos ilícitos, laboratorios y rutas de tráfico.

A pesar de lo anterior, entre 1998-2011 la zona fronteriza con Brasil ha cobrado un papel estratégico para la supervivencia de los grupos irregulares. En particular, se puede destacar una relocalización de las FARC y las bandas emergentes mediante el incremento de sus actividades ilícitas en la zona. Esta relocalización se explica a partir de dos razones principales: de un lado, por la mayor presión militar del Estado colombiano en los departamentos del interior; y por otro, debido a un cambio en las estrategias territoriales y armadas de las FARC. En cuanto a la mayor presión del

<sup>2</sup> Las guerrillas organizan su estructura armada mediante unidades militares más pequeñas que se denominan bloques, los cuales, a su vez, se encargan de coordinar las estrategias que deben seguir los cinco frentes o subunidades que componen cada bloque guerrillero.

Estado es preciso subrayar que desde finales de la década de 1960 hasta 1998 era indiscutible que la capacidad de la fuerza pública colombiana se veía desbordada por las acciones del ELN y grupos paramilitares<sup>3</sup>. En este contexto, las FARC lograron tomar el control de Mitú, capital del departamento del Vaupés en 1998, al tiempo que había logrado un cerco militar sobre las principales ciudades del país, entre las cuales se destacan Bogotá y Medellín. En respuesta, el gobierno de Pastrana (1998-2002) inició una transformación de las fuerzas militares a nivel de doctrina, profesionalización y tecnología para restablecer la autoridad en las áreas disputadas por otros actores no estatales. Desde este periodo, el Estado recuperó la iniciativa militar mediante un aumento progresivo en el número de combates en contra de los grupos irregulares. De manera posterior, las dos administraciones presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) se encargaron de continuar esta tendencia. Bajo su mandato, los recursos derivados del Plan Colombia, así como la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, fueron decisivos para recuperar el control del territorio nacional y eliminar la presión irregular sobre los principales centros políticos y administrativos. Como resultado, los grupos irregulares, y específicamente las FARC, tuvieron que renunciar al control territorial que mantenían en numerosas zonas del país e iniciar un repliegue hacia espacios donde el Estado aún no había multiplicado los combates en su contra. Así, por ejemplo, las operaciones del ejército en el marco del Plan Patriota desde el año 2003 sobre Guaviare, Meta y Caquetá, rápidamente llevaron a que las FARC relocalizaran sus estructuras armadas en los departamentos vecinos de Guainía, Vaupés y Amazonas. De igual manera, la relocalización de las FARC hacia esta zona de frontera no sólo se explica por factores externos, sino también por lógicas internas. Debido a la imposibilidad de mantener un control extendido sobre numerosos municipios, esta guerrilla priorizó el control de zonas estratégicas que le permitieran asegurar beneficios militares y políticos. Bajo esta racionalidad, el repliegue de las FARC se adelantó de manera táctica sobre las zonas fronterizas<sup>4</sup> por la posibilidad de prolongar el conflicto.

Aunque el uso funcional de esta frontera no es nuevo, hoy en día los grupos obtienen importantes ganancias militares y políticas para continuar la confrontación. Investigaciones recientes señalan que un conflicto interno puede prolongarse en la medida en que el grupo armado busque recursos para movilizarse por fuera del territorio del Estado objetivo y establezca líneas transnacionales de financiación (Salehyan, 2008 y Gleditsch, 2007). Para este efecto, la localización en las fronteras es de vital importancia para cumplir con este propósito. Studdard, por su parte, menciona que los rebeldes aprovechan los estados cercanos para percibir ayuda logística, ampliar tropas o establecer bases y así continuar sus hostilidades (2004). De igual manera, los grupos armados aprovechan las fronteras para realizar toda clase de tráfico y sostener su economía de guerra (Buhaug y Lujala, 2005). Incluso, por medio de estudios econométricos se ha concluido que numerosas guerras civiles tienen lugar cerca de las fronteras por ser zonas ideales para huir de la confrontación (Buhaug y Gates, 2002). Desde estos lugares, los rebeldes pueden evadir los ataques milita-

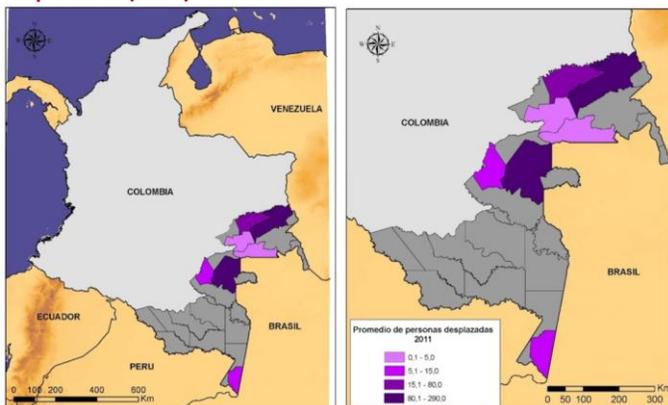
<sup>3</sup> Esta situación se evidencia en la multiplicación de los escenarios que estuvieron bajo la influencia de las guerrillas. Por ejemplo, en el año 1985, de los 1100 municipios de Colombia, 173 registraban presencia guerrillera, lo cual se amplió a 437 en 1991 y a 622 municipios en 1995 (Echandía, 2006:28).

<sup>4</sup> Aunque las fronteras no son el único escenario donde se expresa el poder de fuego de los grupos irregulares, dentro de un análisis multitemporal sí es claro que las fronteras son un espacio privilegiado para concentrar su iniciativa armada (Echandía, Bechara y Cabrera, 2010).

res de las fuerzas regulares, pues estos últimos no pueden ejercer su capacidad armada por fuera de su territorio soberano.

Por otra parte, la presencia de grupos armados en zonas de frontera deteriora las condiciones económicas y de seguridad de las poblaciones limítrofes, lo cual repercute de manera negativa en las relaciones exteriores entre países colindantes. Esto se manifiesta en un traslado de las manifestaciones del conflicto en los Estados vecinos; en la recepción de refugiados; el fomento de un comercio ilegal de armas; el traspaso de rebeldes para adelantar saqueos; el tráfico de estupefacientes, personas y bienes (Buhaug y Gleditsch, 2004 y Studdard, 2004). De igual forma, las relaciones exteriores se pueden afectar por la violación de la soberanía de los países vecinos mediante operaciones contrainsurgentes que pueden transgredir los límites fronterizos (Salehyan, 2008). En este contexto, los grupos ilegales tienen una importante ganancia política en la medida en que pueden desestabilizar las relaciones diplomáticas y se convierten en un asunto obligado en la agenda internacional por las externalidades negativas que se derivan de su actuación transfronteriza. A partir de estos análisis se encuentra que la relocalización armada hacia las fronteras guarda un cálculo estratégico que no se debe subestimar. De tal manera, las FARC y los grupos narcotraficantes han sido conscientes de la permeabilidad de la frontera colombo-brasilera para el tráfico de drogas y armas ligeras (Dupuy, 2006); y también para la creación de áreas de descanso y entrenamiento (Pizarro, 2004:303). No cabe duda que la localización de grupos ilegales en esta zona también ha sido conveniente para integrar los polos de producción y exportación de coca (Echandía, 2006). Es más, se han tenido registros de campamentos irregulares en suelo brasilero, lo cual corrobora el traspaso funcional de estos grupos para garantizar su supervivencia (El Espectador, 2010). Al tiempo, el ejército brasilero ha sido objeto de ataques por parte de las FARC (Restrepo, 2009:133). Y por último, no se debe perder de vista el aumento reciente del número de refugiados colombianos en Brasil (El Universo, 2011) En el primer conjunto de mapas (ver mapas 1) es posible ubicar los departamentos fronterizos de Colombia con Brasil y, en particular, el promedio de desplazados para el año 2011.

**Mapas 1: Ubicación de la frontera colombo-brasilera y promedio de desplazados (2011)**



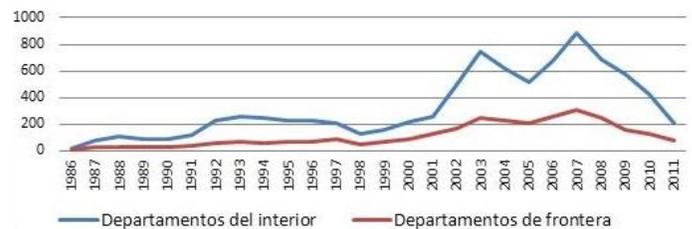
**Colombia y Brasil frente a las tendencias del conflicto armado en la frontera**

En medio del repliegue estratégico de los grupos irregulares es necesario revisar en qué ha consistido la estrategia de seguridad del gobierno co-

lombiano y brasilero. Sobre el particular, se pueden identificar dos deficiencias centrales. Primero, el esfuerzo militar del Estado colombiano medido en combates se queda corto para responder de manera integral a las actividades armadas, financieras y violentas que ocurren en la frontera. Y segundo, los esquemas de seguridad de ambos países presentan errores tácticos y estratégicos para enfrentar a los grupos ilegales, lo cual impide una cooperación binacional que facilite una resolución del conflicto.

En cuanto a la primera deficiencia, se destaca la poca coherencia geográfica de los combates del ejército colombiano respecto a las zonas funcionales para continuar el conflicto. Esto se debe a que el Gobierno priorizó una ofensiva armada en los departamentos del interior del país, sin establecer operativos similares en departamentos de frontera, aun cuando pueden jugar un papel funcional en la prolongación del conflicto (ver gráfico 2).

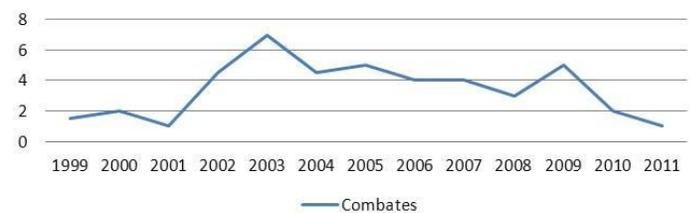
**Gráfico 2: Combates en departamentos del interior vs combates en departamentos de frontera**



Fuente: elaborado a partir de datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia.

De hecho, al considerar los pocos combates adelantados en los tres departamentos fronterizos con Brasil entre 1999 y 2011, se descubre que la ofensiva del Estado disminuye justo cuando se inicia el reacomodamiento de los grupos armados hacia las zonas limítrofes. El gráfico 3 evidencia que entre los años 2003-2008 los combates caen y, pese a un leve repunte en 2009, para 2010-2011 los combates se mantienen en un nivel bajo.

**Gráfico 3: Combates de las fuerzas militares en Guainía, Vaupés y Amazonas**

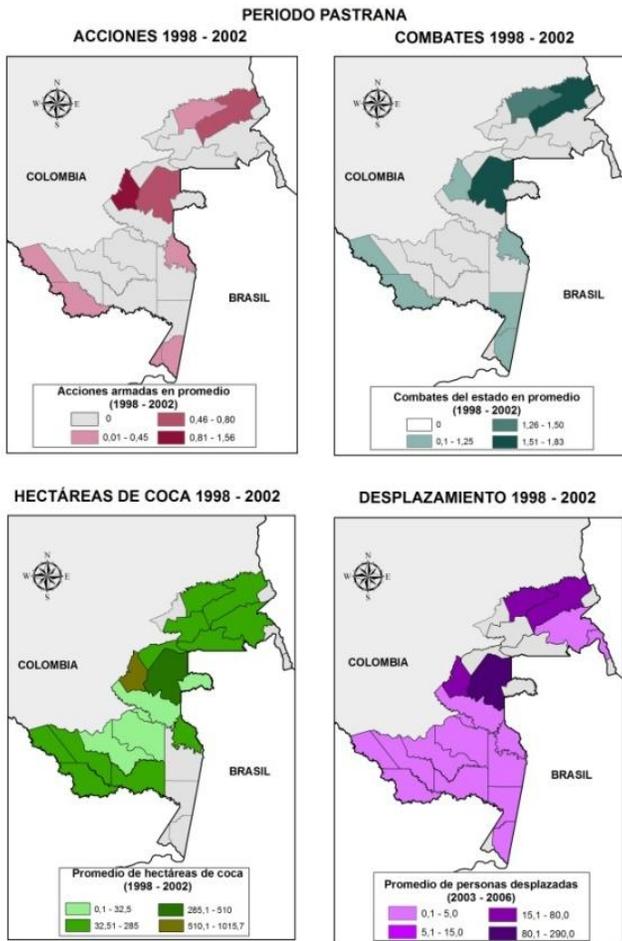


Fuente: elaborado a partir de datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia.

Ahora bien, no hay que desconocer que hacia finales del segundo gobierno de Uribe y en la actual administración de Santos (2010-2014) se registra una reducción en el número nacional de combates del ejército (ver gráfico 2). Esta tendencia se explica, en buena medida, por la concentración de los escenarios de la confrontación. Precisamente, con el retroceso territorial de los grupos irregulares, el Estado poco a poco logró focalizar su esfuerzo militar en un número reducido de municipios. Así,

mientras que en 2008, 402 municipios registraron combates en contra de algún grupo irregular; para 2009 esta cifra pasó a 221 municipios. Asimismo en 2010 los combates se presentaron en 199 municipios y, en 2011, en 192<sup>5</sup>.

**Mapas 2: Acciones, combates, cultivos ilícitos y desplazamiento (1998-2002)**

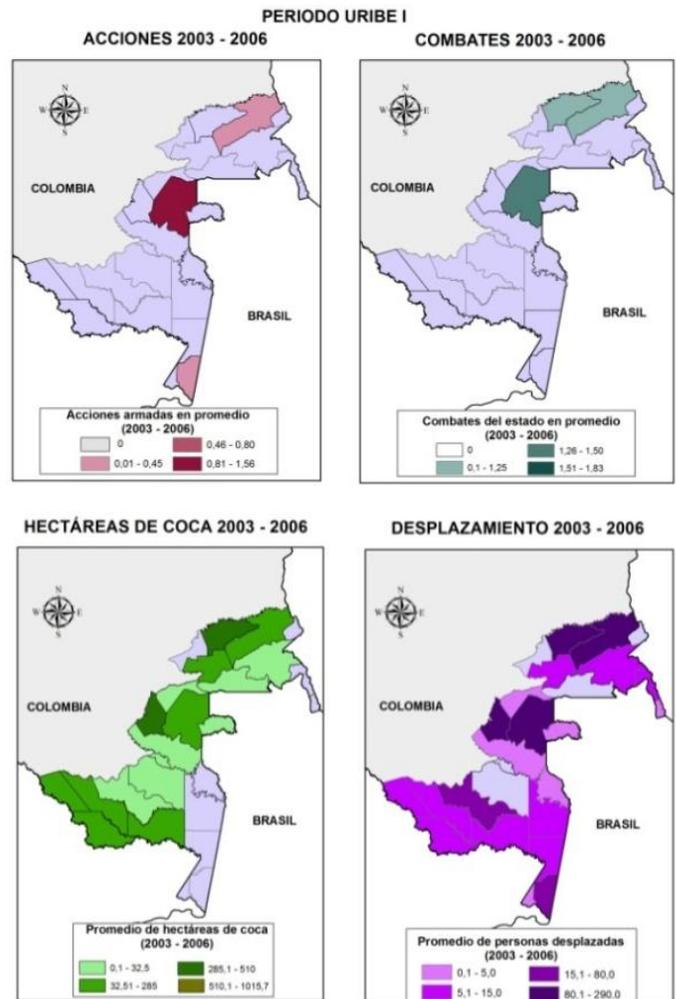


Aunque a nivel nacional pareciera ventajosa esta concentración del esfuerzo militar, a nivel municipal los escenarios de confrontación no necesariamente coinciden con los espacios donde los grupos armados adelantan algún tipo de actividad armada o ilegal. En específico, el esfuerzo del Estado medido en combates tan sólo responde a los espacios donde se presentan acciones irregulares y no a otras actividades ilegales como la presencia de cultivos ilícitos o a espacios donde se presentan desplazamientos forzados. Lo anterior persiste a través del tiempo si se comparan sucesivamente la administración presidencial de Pastrana con el primer y segundo gobierno de Uribe. En los mapas (2, 3, 4) se observa una coincidencia geográfica de la iniciativa militar del Estado frente a las acciones

<sup>5</sup> Los datos corresponden al Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República. Se puede extraer a través de: <http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx>

armadas de los irregulares; pero, al comparar los combates con la presencia de cultivos de coca y los escenarios donde hay desplazamiento forzado, se observa que la iniciativa de la fuerza pública queda desbordada por estas manifestaciones del conflicto y la violencia.

**Mapas 3: Acciones, combates, cultivos ilícitos y desplazamiento (2003-2006)**

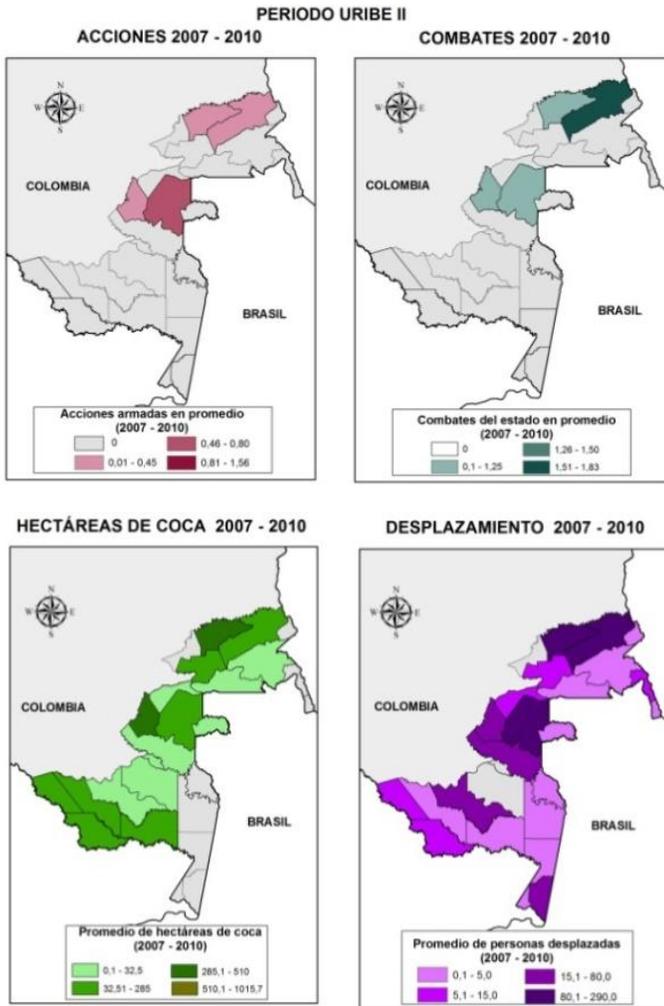


Como resultado, la distribución de los combates es poco estratégica respecto a los escenarios donde tales grupos intentan consolidar su economía de guerra y presencia territorial mediante la intimidación de la población local. Al respecto, cabe aclarar que los combates en esta frontera normalmente facilitan la identificación de campamentos, zonas de cultivo y laboratorios de procesamiento. Así, el bajo número de combates otorga una ventaja importante para la continuidad de cultivos de coca<sup>6</sup> y la ejecución de actividades hostiles contra la población. También el número creciente de desplazados y la persistencia en las tasas de homicidio revelan la incapacidad de la fuerza pública para evitar y contrarrestar la intimidación y control que ejercen los grupos ilegales sobre los habitantes de

<sup>6</sup> De hecho, con los parques naturales, el complejo selvático de la Amazonía y el uso intensivo de minas antipersonas, los grupos ilegales han logrado obstaculizar la detección y erradicación de cultivos ilícitos.

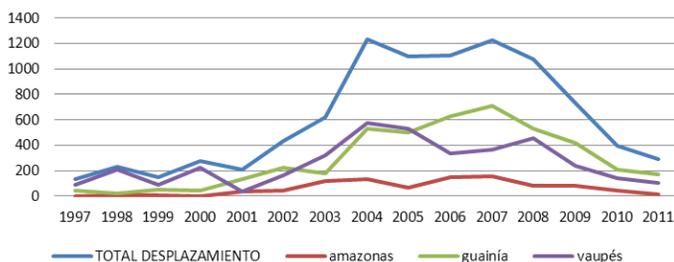
estas zonas. Estas manifestaciones de la violencia fueron particularmente críticas entre 2003-2008, periodo central del repliegue armado (ver gráfico 4).

**Mapas 4: Acciones, combates, cultivos ilícitos y desplazamiento (2007-2010)**



Fuente: elaborados con datos del Observatorio de Derechos Humanos, el Sistema Integral y Monitoreo a los Cultivos Ilícitos –SIMCI- e información del Departamento Nacional de Planeación.

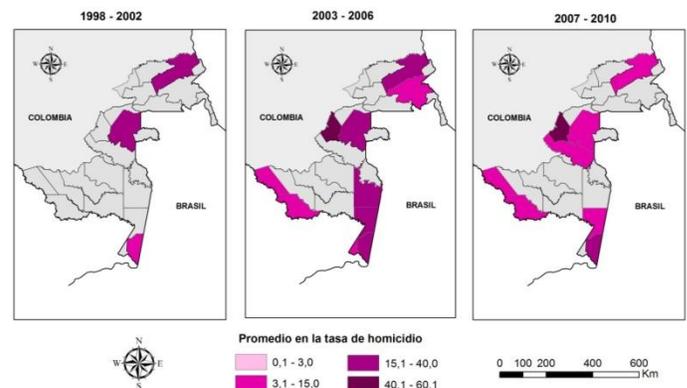
**Gráfico 4: Número de desplazados en la frontera con Brasil (1997-2011)**



Fuente: Datos del Departamento Nacional de Planeación

Incluso, al considerar en simultáneo los escenarios de desplazamiento forzado y los municipios con altas tasas de homicidio (ver mapas 5) sería posible identificar los escenarios donde los grupos irregulares intentan consolidar su presencia territorial. De acuerdo a Kalyvas, la mayor violencia en un determinado escenario indica una disputa entre actores armados por la consolidación de su poder en el territorio (2001). Así, a lo largo de tres periodos presidenciales, la persistencia en las tasas de homicidio y los desplazamientos permiten destacar varios municipios de la frontera donde hay acciones hostiles que tienen como fin el control de corredores estratégicos, zonas de cultivo, espacios de refugio y también de abastecimiento. De tal modo, los combates adelantados entre 1998-2010 no se han traducido en una contención de la actividad irregular y al contrario, no se ha evitado que los grupos armados usen la frontera para sus propósitos de control y supervivencia.

**Mapas 5: Tasas de homicidio en la frontera con Brasil (1998-2010)**



Fuente: elaborado con datos de Medicina Legal.

La segunda deficiencia militar hace alusión a que las políticas de seguridad que rigen los dispositivos armados a lado y lado de la frontera no son congruentes a nivel táctico y estratégico con el *modus operandi* de los grupos ilegales. Si bien desde los gobiernos de Álvaro Uribe en Colombia y Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil se ha dispuesto un número significativo de efectivos sobre su frontera compartida, sus políticas han subestimado la capacidad de adaptación de los grupos ilegales. Al considerar los dispositivos armados de la fuerza pública colombiana, se destaca la presencia de la Brigada 26 del Ejército en Leticia, capital de Amazonas. En Vaupés y Guainía están las brigadas 22 y 28 del Ejército, cuyo puesto de comando se ubica respectivamente en San José de Guaviare y Puerto Carreño. A su vez, la Armada Nacional cuenta con dos puestos fluviales de control, uno sobre el río Amazonas y un batallón fluvial de marina en Puerto Inírida, Guainía. La Policía Nacional cuenta con efectivos en las cabeceras municipales. Y la Fuerza Aérea se estableció desde el Grupo Aéreo del Amazonas con el propósito de detectar y atacar aviones ilegales en la zona (Semana, 2011). Del lado brasilero se encuentra el Comando Militar de la Amazonia (CMA) con sede en Manos. Está presente el Batallón de Infantería de selva con aproximadamente mil hombres; puestos de la Marina Tabatinga y Sao Gabriel da Cachoeira. Y en particular, el Destacamento Aéreo de Sao Gabriel de Cachoeira despliega sus operaciones

de acuerdo a la información que brinda el Sistema de Vigilancia de la Amazonía – SIVAM<sup>7</sup> (Restrepo, 2009:127-132).

Aunque estos esquemas armados indican un amplio despliegue, la cobertura de estos dispositivos sigue localizada en puntos muy específicos respecto a la complejidad de la zona. Ciertamente, un primer error táctico es la concentración de las distintas fuerzas armadas en sedes o bases en la frontera. Tales bases son el resultado de políticas de seguridad que pretenden reforzar la presencia del Estado mediante instalaciones que acompañen de manera permanente a la población<sup>8</sup>. A nivel armado, las bases tienen el propósito de disuadir al enemigo de actividades armadas en un perímetro cercano y facilitar el aprovisionamiento de la tropa desde un punto fijo. No obstante, dichas instalaciones generan un acantonamiento de los efectivos cuando es necesario que parte del personal preste guardia para evitar o repeler ataques (Echandía, 2006). Así, las bases en la frontera colombo-brasilera son altamente susceptibles a acciones militares y lo que resulta más contradictorio, estos espacios de protección reducen los incentivos de la tropa para moverse activamente y enfrentar a los grupos ilegales. Un segundo error táctico consiste en el despliegue reactivo más que proactivo. Pese a los avances tecnológicos y satelitales, desde las bases no es posible adelantar un monitoreo constante de las zonas geográficas más complicadas ni de los ríos que sirven de corredor para los grupos ilegales. Así, las brigadas y los batallones más que esperar el reporte de actividades armadas o ilícitas, deberían cumplir con operativos periódicos a lo largo y ancho de los territorios fronterizos con el propósito de recolectar información, adelantar operativos de inteligencia, captura y detectar tanto campamentos como rutas de tráfico y otras actividades ilícitas<sup>9</sup>. Pese a esta posibilidad también se debe considerar que el uso de minas antipersonas dificulta un avance directo por terreno para realizar estas operaciones.

En medio de estas falencias tácticas, se pone en evidencia que la sola militarización no es suficiente como estrategia central para superar el conflicto, ya que esto no se traduce en un efectivo monopolio de la fuerza y en la obtención de una territorialidad plena (Salehyan, 2008). En realidad, la efectiva contención de los grupos irregulares implica una visión estratégica sobre la localización de su presencia armada, de los nuevos métodos de guerra indirecta; los medios de financiación que lo soportan; y una evaluación sobre la necesidad de cooperar con agentes más allá de las fronteras.

Sobre este último punto, el SIVAM establecido desde el 2002, ofrece un soporte clave dentro de la cooperación fronteriza colombo-brasilera para detectar traspasos y vuelos ilegales que rápidamente son atacados. Sin embargo, esta estrategia de cooperación como eje principal de las políticas de seguridad de ambos gobiernos también se queda corta frente a la

<sup>7</sup> Este sistema es un dispositivo de alerta temprana ante traspasos ilegales que se sirve de radares, sensores meteorológicos, comunicaciones digitales por satélite, entre otros avances para recolectar información en tiempo real.

<sup>8</sup> El Conpes 3450 de 2007 en el caso colombiano y el Plan estratégico de fronteras de 2011 en el caso de Brasil establecen la necesidad de mayores instalaciones militares en la frontera.

<sup>9</sup> Brasil ha avanzado sobre este punto mediante la operación Agatha 1, realizada en agosto de 2011 como parte del Plan Estratégico de fronteras, con el cual 2.838 efectivos lograron la destrucción de 3 pistas clandestinas en la frontera con Colombia; la identificación de cinco madereras ilegales; así como un patrullaje sobre los puntos principales de entrada y salida de municiones (ABTI, 2011).

alta capacidad de adaptación de los grupos ilegales. No se debe descuidar que los grupos armados han reducido el uso de aeronaves y ahora emplean otros mecanismos para llevar a cabo actividades de tráfico. En concreto, no sólo hay cambios reiterados en las rutas para efectuar intercambios ilegales, sino que además se suele aprovechar el libre tránsito de los habitantes de la frontera para adelantar actividades de microtráfico.

Si bien la cooperación colombo-brasilera se encuentra en un punto de inflexión positivo a la hora de intercambiar información y coordinar acciones contra los grupos armados<sup>10</sup>, esta colaboración bilateral se debe reforzar para avanzar hacia una resolución militar o negociada del conflicto. Para hablar de cooperación debe ser evidente la coordinación en doctrina y acción de todas las estructuras que componen la fuerza pública (ejército, policía, fuerza aérea y armada). Al mismo tiempo, se deben garantizar las bases financieras, políticas y legales para su sostenimiento, lo cual no es del todo claro en ambos países.

Pese a lo anterior, una estrategia cooperativa de seguridad puede ser decisiva para lograr una salida al conflicto colombiano y evitar tensiones con el vecindario. Si se analizan las alternativas de resolución del conflicto interno colombiano, en realidad una salida negociada o el logro de una derrota militar de los grupos armados, pasa necesariamente por la colaboración de los estados vecinos. Bajo el supuesto de una negociación de paz, la desarticulación de las estructuras armadas requeriría el levantamiento de los campamentos extraterritoriales y la verificación de otras condiciones que van más allá del espacio soberano colombiano<sup>11</sup>. Eso supone un apoyo de los estados vecinos para verificar la suspensión real de hostilidades, de las redes criminales y los tráfico que permiten su continuidad dentro del conflicto. Igualmente, una salida militar es particularmente costosa a nivel armado y diplomático si no existe una cooperación entre Colombia y el Estado, donde se refugian u operan los irregulares. Así, cualquier operación armada requiere la colaboración del Estado vecino para obtener información sobre espacios y personas más allá de la frontera y autorización para actividades de monitoreo como para el desarrollo de operaciones de captura u ofensivas extraterritoriales.

### Conclusiones-discusión

Colombia y Brasil deben reevaluar la amenaza que representan los grupos armados en la frontera. Como se mencionó, la localización de grupos irregulares en zonas limítrofes permite una prolongación del conflicto. Las fronteras facilitan una continuidad de los esfuerzos de guerra por ser posiciones de elevado valor estratégico para la diversificación de redes de financiación, reordenamiento de tropas y establecimiento de santuarios para su protección.

Una segunda conclusión importante es que los grupos armados adecúan sus estrategias armadas y tienen un impacto transfronterizo. Por lo tanto, aquellas medidas militares tanto a nivel unilateral como en conjunto deben complementarse con acuerdos políticos que faciliten una coordina-

<sup>10</sup> Las operaciones Colbra I (2005) y Colbra II (2007) entre las Fuerzas Aéreas de Colombia y Brasil han facilitado la creación de procedimientos conjuntos, el entrenamiento compartido; la integración de sistemas de comunicación, entre otros (Revista aeronáutica, 2007).

<sup>11</sup> Entre estas condiciones se encuentra la entrega de armas y material de inteligencia, la desarticulación de las redes logísticas de apoyo e inteligencia y la suspensión de acciones bélicas, elementos indispensables dentro y fuera del territorio colombiano.

ción de diagnósticos y acciones sobre las fronteras, con el fin de reconocer las transformaciones de la guerra y actuar en concordancia con esta.

Sobre esta base, la cooperación entre estos dos estados debe orientarse hacia la planeación conjunta a nivel de seguridad mediante el soporte de las ramas ejecutivas, legislativas y judiciales. Las decisiones militares y de seguridad en esta frontera requieren un mayor respaldo legal y constitucional; la disponibilidad de un presupuesto suficiente; y el acompañamiento del aparato judicial para investigar y procesar posibles hechos ilícitos de los actores armados involucrados. En coherencia con ese supuesto, el lanzamiento y promoción de una política bilateral, e incluso multilateral, en seguridad fronteriza puede y debería ser del interés de las distintas ramas del poder, punto que refleja la ausencia de pronunciamientos o debates internos en los distintos congresos y cortes sobre el tema fronterizo.

A su vez, es imperativo que los gobiernos de Brasil y Colombia atiendan de manera urgente y eficaz las consecuencias negativas que se derivan del conflicto armado y la violencia en la zona. Ello implica la implementación de programas integrales que favorezcan la prevención y atención de las personas en condición de desplazamiento forzado; así como planes permanentes que eviten una mayor degradación de los parques naturales y la biodiversidad de la Amazonía por cuenta de la explotación y tráfico que está presente en la zona y que, en el peor de los casos, es favorecida por intereses tanto privados como públicos en ambos lados de la frontera.

Todo lo expuesto apunta a que Colombia y Brasil rompan con un manejo simplificado de la amenaza que representan los grupos armados localizados en la frontera. En la medida en que se reconozca la funcionalidad de esta zona y se actúe en concordancia a las estrategias cambiantes de los grupos ilegales, los estados podrán construir políticas más efectivas que faciliten una superación de las condiciones de conflicto y violencia.

**Reflexión editora Rosa-María Martínez:** La autora realiza un interesante y eficaz ejercicio con el fin de resaltar la evolución de la confrontación armada en Colombia y la respuesta de los grupos armados irregulares a estrategias ofensivas utilizadas por la Fuerza Pública Colombiana, especialmente la confrontación armada en zonas de frontera. Llama particularmente la atención, que en el análisis que hace la autora sobre las políticas de seguridad de lado y lado de la frontera y la respuesta de las Fuerzas de Seguridad tanto Brasileñas como Colombianas ante la dinámica de focalizar la confrontación armada en zonas de frontera. Sin lugar a duda, este es un tema que debe ser atentamente considerado por los hacedores de políticas en materia de seguridad nacional y ciudadana en los dos países, y este artículo esboza algunos puntos del debate que abren la puerta para trabajos más extensos sobre el tema. Finalmente, cabe destacar el uso acertado que hace la autora de los mapas debido a que ofrecen una mayor claridad al lector sobre el tema discutido y refuerzan los argumentos hechos a lo largo del artículo.

#### Referencias bibliográficas

Associação Brasileira de Transportadores Internacionais – ABTI. (2011). *Dilma Rousseff destaca avanço na repressão ao crime nas fronteiras brasileiras*. (8 de octubre) Extraído el 10 de mayo desde:

[http://www.abti.org.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1894:dilma-rousseff-destaca-avanco-na-repressao-ao-crime-nas-fronteiras-brasileiras&catid=1:noticias&Itemid=274](http://www.abti.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1894:dilma-rousseff-destaca-avanco-na-repressao-ao-crime-nas-fronteiras-brasileiras&catid=1:noticias&Itemid=274).

Buhaug, H. y Lujala P. (2005). Accounting for scale: Measuring geography in quantitative studies of civil war. *Political Geography*, 399–418.

Buhaug, H. y Gleditsch, K. (2006). The Death of Distance? The Globalization of Armed Conflict. En M. Kahler & B. Walter (Eds), *Territoriality and Conflict in an Era of Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press.

Buhaug, H. y Gates, S. (2002). The Geography of Civil War, *Journal of Peace Research*, (39), 417-433.

DeRouen, K. R., y Sobek, D. (2004). The dynamics of civil war duration and outcome. *Journal of Peace Research*, (41), 303–320.

Dupuy, P. (2006), *Violencia, crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia*, Colombia, Oficina de Naciones Unidas en Colombia.

Echandía, C., Bechara, E y Cabrera, I. (2010). Colombia: el estado del conflicto armado al final de la administración Uribe. En *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2010*. Bogotá, Colombia: Fundación Friedrich Ebert Stiftung - FESCOL.

Echandía, C. (2006). *Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-2006*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

El Espectador. (2010). Las Farc tienen bases permanentes en Brasil. Extraído el 10 de mayo desde:

<http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-203499-farc-tienen-bases-permanentes-brasil>.

El Universo. (2011). Cerca de 900 refugiados colombianos son reasentados en Suramérica. Extraído el 10 de mayo desde:

<http://www.eluniverso.com/2011/02/22/1/1447/880-refugiados-colombianos-ecuador-son-reasentados-suramerica.html>

Gleditsch, K. (2007). Transnational Dimensions of Civil War. *Journal of Peace Research*.

Kalyvas, S. (2001). La violencia en medio de la guerra civil, esbozo de una teoría. *Revista Análisis Político* (42).

Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República de Colombia (2007). *Diagnóstico Departamental del Amazonas*. Extraído el 10 de mayo desde:

<http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/2003-2007/amazonas.pdf>

Restrepo, C. (2009). *Colombia: seguridad y defensa en las fronteras*. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia.

*Revista Aeronáutica – Fuerza Aérea Colombiana. Ejercicio combinado COLBRA II*. Extraído el 10 de mayo desde:

<http://www.revistaaeronautica.mil.co/?idcategoria=56210>

Semana. (2011). Ministerio de Defensa activó base aérea en el Amazonas. *Semana*, (Diciembre 9). Extraído el 10 de mayo desde:

<http://www.semana.com/nacion/ministerio-defensa-activo-base-area-amazonas/168859-3.aspx>

Salehyan, I. (2008). No Shelter Here: Rebel Sanctuaries and International Conflict. *The Journal of Politics*, (70). Southern Political Science Association.

Studdard, K. (2004). War Economies in a Regional Context: Overcoming the Challenges of Transformation. *IPA Policy Report*. International Peace Academy New York.